

Estrategias de seguridad ciudadana y su impacto en la percepción ciudadana. Un análisis desde el municipio de San Gil, Santander (2019-2023)

Citizen Security Strategies and Their Impact on Public Perception: An Analysis from the Municipality of San Gil, Santander (2019-2023)

Autor(es)

María Eugenia Vega

mevega@poligran.edu.co

Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano

Candidata a Doctora en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires), Magister en Defensa Nacional y Politóloga de la Universidad de Buenos Aires. Profesora investigadora de tiempo completo Escuela de Administración y Competitividad, Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano. Miembro del Grupo Interdisciplinar en Asuntos Públicos (GIAP).

ORCID: [0000-0002-4376-2211](https://orcid.org/0000-0002-4376-2211)

María Jessenia Gómez Higuera

magomez3@poligran.edu.co

Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano

Administradora de Empresas y estudiante del Programa de Administración Pública, Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano y miembro del Semillero de Investigación en Estudios Políticos y Sociales de América Latina (IEPSAL), Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano.

ORCID: [00009-0009-4208-2263](https://orcid.org/00009-0009-4208-2263)

Recibido: 16 de abril de 2025

Aceptado: 06 de julio de 2025

Resumen

Este estudio analiza las estrategias de seguridad ciudadana implementadas en San Gil, Santander, Colombia, entre 2019 y 2023 y su impacto en la

percepción ciudadana sobre convivencia y tranquilidad pública. A través de un enfoque cualitativo basado en análisis documental y bibliohemerográfico, se identifican las políticas locales enmarcadas en la Política Nacional de



Seguridad y Convivencia Ciudadana. Los resultados arrojan avances en la articulación interinstitucional, tecnologías de vigilancia y programas preventivos; sin embargo, también muestran que persiste una brecha entre las acciones institucionales y la percepción de inseguridad, especialmente en grupos vulnerables y territorios específicos. Se concluye que, si bien las estrategias han reducido indicadores delictivos, la percepción de seguridad está influida por factores sociales, culturales y comunicacionales que requieren un enfoque integral, diferencial y participativo. Se recomiendan fortalecer la comunicación pública multicanal, institucionalizar la participación ciudadana vinculante y promover la evaluación conjunta entre Estado, comunidad y academia para lograr políticas legítimas e inclusivas.

Palabras Clave

Seguridad Ciudadana, Percepción Ciudadana, Políticas Públicas, Estrategias Territoriales, Municipio San Gil - Santander - Colombia.

Abstract

This study analyzes the citizen security strategies implemented in San Gil, Santander, Colombia, between 2019 and 2023, and their

impact on public perception regarding coexistence and public tranquility. Through a qualitative approach based on documentary and bibliographic analysis, local policies framed within the National Policy on Security and Citizen Coexistence are identified. The results show advances in interinstitutional coordination, Surveillance technologies, and preventive programs; however, a gap persists between institutional actions and the perception of insecurity, especially among vulnerable groups and specific territories. It is concluded that, although the strategies have reduced crime indicators, the perception of security is influenced by social, cultural, and communicational factors that require a comprehensive, differential, and participatory approach. It is recommended to strengthen multichannel public communication, institutionalize binding citizen participation, and promote joint evaluation among the State, community, and academia to achieve legitimate and inclusive policies.

Keywords

Citizen Security, Public Perception, Public Policies, Territorial Strategies, Municipality of San Gil - Santander - Colombia



Introducción

La seguridad ciudadana se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales para garantizar la gobernabilidad democrática, la calidad de vida y la cohesión social en América Latina (PNUD, 2013; CEPAL, 2019). En el contexto de las transformaciones globales en el sistema internacional, donde la seguridad se ha ampliado para incluir dimensiones humanas, sociales y de gobernanza, el concepto de seguridad ciudadana en Colombia ha evolucionado más allá de un enfoque centrado exclusivamente en la criminalidad. Actualmente, incorpora dimensiones preventivas, sociales y territoriales, en las cuales el Estado asume un rol articulador entre instituciones, ciudadanía y sociedad civil, buscando una gobernanza inclusiva y participativa (Ministerio del Interior, 2022). En este sentido, la seguridad ciudadana deja de ser concebida únicamente como un asunto de orden público para convertirse en una responsabilidad colectiva orientada a construir condiciones de convivencia, confianza institucional y percepción de bienestar.

En municipios intermedios como San Gil, ubicado en el departamento de Santander, Colombia, con una población de aproximadamente 60.000 habitantes, estos cambios adquieren especial relevancia. San Gil, reconocido históricamente por su vocación turística y comercial, enfrenta retos crecientes asociados a la urbanización acelerada, la llegada de población flotante, el microtráfico, los hurtos callejeros y la violencia intrafamiliar (DANE, 2023; Policía Nacional, 2023). Si bien en este caso no superan los promedios nacionales, impactan significativamente en la percepción ciudadana de inseguridad, especialmente en zonas de alta densidad residencial o con baja cobertura institucional.

La percepción de seguridad, entendida como una dimensión subjetiva pero decisiva, se ha convertido en un parámetro crucial para evaluar la eficacia de las políticas públicas. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2021), los niveles de percep-

ción no siempre guardan relación directa con las estadísticas delictivas, dado que dependen de factores como la confianza en las instituciones, la calidad del entorno urbano, las experiencias personales con el delito, la información mediática y la capacidad estatal para comunicar y rendir cuentas. En Colombia, investigaciones como las de Gómez-Suárez y Restrepo (2021) y Rojas (2020) han demostrado que los sentimientos de inseguridad pueden persistir incluso en contextos con avances en indicadores objetivos de criminalidad.

A nivel local, el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) de San Gil (2020-2023) contempla acciones orientadas a garantizar la tranquilidad pública mediante patrullajes conjuntos, instalación de cámaras de videovigilancia, campañas pedagógicas y trabajo colaborativo con líderes comunitarios (Alcaldía de San Gil, 2023). No obstante, se evidencia un vacío entre el diseño institucional de estas estrategias y su apropiación por parte de la ciudadanía, fenómeno también identificado en estudios sobre municipios intermedios (Bonilla & Acosta, 2020; Maldonado & Pabón, 2022).

En este sentido, existe consenso académico en subrayar que una política de seguridad que no integre variables socioculturales, de género y participación, corre el riesgo de volverse ineficaz o de fortalecer percepciones negativas de exclusión, represión o desconfianza (Gallego, 2019; Salazar & Peña, 2023). Por tanto, la evaluación de la percepción ciudadana resulta indispensable, tanto para legitimar las acciones estatales como para diseñar intervenciones ajustadas a las necesidades reales del territorio.

Así, este artículo se enfoca en analizar las estrategias de seguridad implementadas en San Gil durante el periodo 2019-2023 y su impacto en la percepción ciudadana, a partir de una revisión documental de fuentes institucionales, normativas y académicas. Para esto, se adopta un abordaje teórico-descriptivo y un método cualitativo basado en el análisis de contenido, con recolección de datos a partir de informes oficiales, legislación vigente, planes locales de desarrollo, estadísticas del Departamento Admi-



nistrativo Nacional de Estadística (DANE), y literatura especializada sobre seguridad pública, percepción ciudadana y gobernanza local.

Su pertinencia radica en su capacidad para visibilizar las tensiones entre el ejercicio institucional de la seguridad y la vivencia cotidiana de los ciudadanos, así como en su enfoque prospectivo orientado al fortalecimiento de las políticas públicas desde una perspectiva participativa, territorial y sostenible. De esta manera, el estudio propone líneas estratégicas prospectivas que buscan cerrar la brecha entre las acciones institucionales y la percepción social, fortaleciendo una gobernanza local inclusiva, legítima y sostenible.

El documento se encuentra estructurado de la siguiente manera: en primer lugar, se presenta un marco teórico amplio que aborda la seguridad ciudadana desde múltiples perspectivas, incluyendo su dimensión multidimensional, los fundamentos jurídicos y normativos, las políticas públicas nacionales y locales, así como los enfoques críticos sobre la relación entre seguridad, gobernanza y percepción social. A continuación, se describe la metodología utilizada para el estudio de caso de San Gil en el período referido. Luego, se exponen los resultados obtenidos sobre las políticas implementadas y la percepción ciudadana. Posteriormente, se discuten las principales brechas y desafíos identificados, incluyendo la prospectiva estratégica para la mejora de la seguridad ciudadana, por lo que como corolario, se plantean conclusiones y recomendaciones orientadas a fortalecer la gobernanza local y la participación ciudadana.

Marco Teórico

El concepto de seguridad ciudadana ha evolucionado notablemente en las últimas décadas, alejándose de una visión tradicional centrada exclusivamente en el control del delito y el mantenimiento del orden público, para adoptar un enfoque más amplio y complejo: la multidimensionalidad de la seguridad. Esta pers-

pectiva reconoce que la seguridad no puede entenderse únicamente desde la óptica de la protección frente a amenazas externas o criminales, sino que involucra dimensiones interrelacionadas que afectan tanto al individuo como a la colectividad y al propio Estado (Buzan, 2008, p. 53). Esta redefinición a partir de la culminación de la Guerra Fría y la transnacionalización de amenazas como el crimen organizado, las pandemias y los riesgos medioambientales, deja en evidencia dos aspectos fundamentales: 1- la caída en desuso de la tradicional distinción entre seguridad nacional - seguridad internacional dado el entrelazamiento entre fenómenos externos e internos y; 2- la complejidad e incertidumbre de los escenarios internacional y doméstico por el surgimiento de nuevas amenazas a la seguridad, que combinadas con las tradicionales, demuestran que las mismas no pueden combatirse por medios estrictamente militares, al abarcar conflictividad de índole económica, política, social y ambiental. (Buzan, 2008, p. 53).

En este orden de ideas, autores como Buzan (2008) sostienen que la seguridad multidimensional integra elementos de la seguridad humana, hemisférica y tradicional, permitiendo así una comprensión más integral de los riesgos y vulnerabilidades que enfrenta la sociedad contemporánea (Buzan, 2008, p. 53). En América Latina, este enfoque ha sido adoptado especialmente a partir de la Declaración sobre Seguridad en las Américas (OEA, 2003, p. 1), que reconoce la necesidad de enfrentar amenazas de diversa naturaleza de manera coordinada y transversa.

Es decir, esta condición de multidimensional posee una serie de dimensiones clave a fin de resultar lo suficientemente comprensiva de la interrelación de variables que implica. A saber:

- Seguridad tradicional: Protección frente a amenazas militares y defensa de la soberanía estatal (Buzan, 2008, p. 54).
- Seguridad humana: Centrada en el individuo, abarca la protección frente a riesgos económicos, sociales, de salud, medioam-



bientales y políticos (Álvarez-Calderón et al., 2017, p. 1110).

- Seguridad ciudadana: Se enfoca en la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, abordando tanto la violencia criminal como las condiciones estructurales que generan inseguridad, como la desigualdad, la exclusión y la falta de acceso a servicios básicos (Arriagada & Godoy, 1999, p. 7).
- Seguridad regional y transnacional: Considera la cooperación entre Estados y organismos internacionales para enfrentar amenazas que trascienden las fronteras nacionales (OEA, 2003, p. 2).

Como puede evidenciarse, este enfoque exige la participación coordinada de múltiples actores: Estado, sociedad civil, sector privado y organismos internacionales, y promueve políticas públicas integrales que combinen prevención, control y participación ciudadana (Blackwell, 2015, p. 154). Pero también requiere políticas que aborden las causas profundas de la inseguridad, como la pobreza, la exclusión social, la falta de oportunidades y la debilidad institucional (Álvarez-Calderón et al., 2017, p. 1112). Por tanto, y de esta manera, la seguridad ciudadana se convierte en un derecho fundamental y en un componente esencial del desarrollo humano y la gobernabilidad democrática.

“La concepción de la seguridad humana y la seguridad multidimensional en el marco de las políticas públicas debe orientar estas al cuidado y el resguardo de la seguridad de las personas, lo que implica un papel diligente de los Estados frente a riesgos y amenazas que se encuentran fuera del control de los individuos a lo largo de sus vidas” (Álvarez-Calderón et al., 2017, p. 1111)

Es decir, si la seguridad ciudadana ha sido tradicionalmente entendida como una función del Estado orientada al control del delito y al mantenimiento del orden público, en las últimas décadas ha evolucionado hacia un enfoque más integral que vincula la prevención social, la ga-

rantía de derechos y la participación ciudadana (PNUD, 2013). De esta forma, se trata entonces de una perspectiva que reconoce que la seguridad no se limita a la represión del delito, sino que debe abordar las causas estructurales de la violencia, tales como la exclusión social, la desigualdad y la falta de oportunidades.

En este contexto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2019) afirma que una política de seguridad efectiva debe incorporar elementos de cohesión social, desarrollo humano y gobernabilidad democrática, en tanto este enfoque contemporáneo reconoce al ciudadano como sujeto de derechos y no como objeto de control, lo que implica una transformación profunda en la forma en que se diseñan e implementan las políticas públicas. Por estas razones Bergman (2017) y Muggah y Aguirre (2018) han advertido que la eficacia de los modelos de seguridad depende del grado de participación ciudadana y del reconocimiento de la diversidad territorial. Por lo tanto, la gobernanza de la seguridad exige un enfoque multidimensional que combine la acción institucional con la corresponsabilidad social y comunitaria.

En consonancia y para el caso colombiano, el Ministerio del Interior (2022) estableció la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a fin de promover la articulación entre instituciones estatales, entes territoriales y organizaciones sociales, con énfasis en enfoques diferenciales, de género y territorialidad. De acuerdo con Bonilla y Acosta (2020), este marco legal representa un avance significativo en la descentralización de la gestión de la seguridad, permitiendo a los municipios adaptar las estrategias a sus dinámicas locales.

Por otro lado, la percepción ciudadana de la seguridad constituye una dimensión subjetiva y política que no siempre guarda correspondencia con los indicadores objetivos del delito, pero que influye directamente en la calidad de vida, el uso del espacio público y la confianza institucional. La UNODC (2021) señala que en muchas ciudades latinoamericanas los ciudadanos se sienten inseguros incluso cuando.



las cifras de criminalidad son bajas, fenómeno que responde a factores psicosociales, simbólicos y culturales. En Colombia, el DANE (2023) reporta que el 45% de los ciudadanos se siente inseguro en su entorno, siendo mujeres, jóvenes y adultos mayores los grupos con mayores niveles de percepción de riesgo. Rojas (2020) argumenta que esta percepción está influenciada por experiencias personales, discursos mediáticos, estigmatización de ciertas zonas urbanas y desconfianza en las autoridades

Estudios como los de Gómez-Suárez y Restrepo (2021) indican que la percepción de seguridad también depende de la visibilidad del Estado, la capacidad de respuesta institucional y la transparencia en la gestión pública. Cuando la ciudadanía no percibe cercanía, eficacia ni legitimidad en las instituciones, mantiene altos niveles de desconfianza, independientemente de la mejora en los indicadores objetivos. Además, Pérez (2019) y Quintero y Londoño (2021) han demostrado el papel determinante de los medios de comunicación en la construcción del miedo colectivo, especialmente en municipios intermedios donde rumores y desinformación amplifican el sentimiento de inseguridad.

En cuanto a las estrategias territoriales y políticas públicas en seguridad, en Colombia estas se diseñan e implementan a través de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), herramientas obligatorias para los gobiernos locales que buscan articular acciones en prevención, control, mediación y justicia, adaptadas a las condiciones particulares de cada territorio (Ministerio del Interior, 2022). Gallego (2019) sostiene que la seguridad ciudadana efectiva depende de tres elementos clave: voluntad política, capacidad institucional y participación comunitaria. Bonilla y Acosta (2020) coinciden en que la descentralización solo es viable si los municipios fortalecen sus capacidades técnicas y presupuestales y promueven escenarios de corresponsabilidad con la ciudadanía.

Más específicamente, Martínez y Rincón (2022) advierten que la videovigilancia puede disuadir ciertos delitos, pero su efectividad depende del

mantenimiento, cobertura y articulación con la Policía, mientras que Salazar y Peña (2023) subrayan que las estrategias comunitarias, como redes vecinales, liderazgo local y educación cívica, poseen mayor sostenibilidad que las medidas coercitivas. Así también la Policía Nacional (2023) reconoce la necesidad de promover modelos de policía comunitaria, justicia restaurativa y patrullajes integrados, especialmente en municipios turísticos donde el flujo poblacional genera tensiones en la percepción de seguridad.

A nivel internacional, una serie de experiencias exitosas demuestran que la efectividad de las políticas depende tanto de la reducción del delito como de la mejora en la percepción de seguridad y la confianza en el Estado. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2013) la denomina en términos de “seguridad con rostro humano” al colocar en el centro a las personas, sus derechos y condiciones de vida, más que al control punitivo. Por su parte, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2021) insiste en que una gobernanza local efectiva requiere diagnósticos participativos, inversión sostenida y articulación entre niveles de gobierno. Adicionalmente, estudios del Igarapé Institute (Muggah & Aguirre, 2018) evidencian que tecnologías, análisis de datos y participación ciudadana pueden reducir la victimización y el miedo en contextos urbanos. Desde un enfoque institucional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2019) enfatiza en el hecho de que las políticas públicas deben construirse desde la evidencia y la evaluación permanente, garantizando procesos transparentes, medibles y con participación activa de la sociedad civil.

En el contexto nacional, diversos estudios han abordado la relación entre percepción, violencia y políticas públicas, destacando la crítica por parte de Gallego (2019), al identificar que la participación ciudadana en planes de seguridad municipal ha sido limitada y, en muchos casos, simbólica. A esta perspectiva se suman Pérez (2019) al identificar cómo el sensacionalismo mediático y la falta de pedagogía institucional



deterioran la confianza ciudadana y las Investigaciones del Observatorio de Seguridad Ciudadana del Cauca (2020), que muestran que la percepción de inseguridad se intensifica cuando no existen canales efectivos de diálogo entre ciudadanía y autoridades. No obstante, Salazar y Peña (2023) evidencian que las redes comunitarias han tenido éxito en zonas periféricas, siempre que exista acompañamiento institucional y liderazgo local sostenido.

Sin dudas, San Gil, como municipio turístico y comercial, enfrenta desafíos propios en la relación entre seguridad y su percepción por parte de la ciudadanía. El Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 plantea estrategias como instalación de cámaras, patrullajes conjuntos, campañas de prevención y fortalecimiento de frentes de seguridad (Alcaldía de San Gil, 2023). Sin embargo, estudios de la Universidad de Santander (2022) señalan que estas acciones no siempre mejoran la percepción ciudadana, especialmente en sectores como Rincón de la Paz, La Gruta o San Martín. Particularmente, la Revista Pensamiento Crítico (Unisangil, 2021) encontró que factores como iluminación deficiente, presencia de expendios de drogas y falta de actividades recreativas contribuyen al sentimiento de vulnerabilidad en jóvenes.

Por todo lo expresado, estas experiencias locales sólo conducen a reafirmar la necesidad de diseñar estrategias de seguridad con un enfoque diferencial, participativo y culturalmente contextualizado, donde la ciudadanía sea un actor activo en la construcción de entornos más seguros.

Método

Enfoque metodológico

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo con un diseño de estudio de caso, centrado en el municipio de San Gil (Santander, Colombia) durante el periodo 2019-2023. En concordancia, se empleó un diseño documental a fin de posibilitar un análisis crítico y contex-

tual tanto de las estrategias de seguridad implementadas en el municipio, como acerca de su impacto en la percepción ciudadana. Este enfoque cualitativo facilita la interpretación de los significados, relaciones y tensiones presentes en las políticas públicas de seguridad, trascendiendo la mera cuantificación de indicadores delictivos (Castañeda, 2024, p. 52).

También, la misma se enmarca en una tradición epistemológica interpretativa, al privilegiar la comprensión del fenómeno de la seguridad desde la experiencia y representación social de los ciudadanos y actores institucionales, reconociendo así la percepción de seguridad siempre estará mediada por factores subjetivos, culturales y contextuales, lo cual es fundamental para un análisis profundo y contextualizado (Gómez-Suárez & Restrepo, 2021; UNODC, 2021).

Tipo y diseño de investigación

La investigación es de tipo descriptivo-analítico, dado que busca caracterizar las estrategias de seguridad en San Gil, examinar su estructura institucional y analizar su repercusión en la percepción ciudadana. El diseño es no experimental, ya que no se manipulan variables, y se basa en la revisión, comparación y categorización de fuentes secundarias de información. El método empleado es de corte documental, sustentado en la consulta y análisis de documentos oficiales, normativas, planes de desarrollo, boletines estadísticos, artículos científicos, informes institucionales y literatura académica nacional e internacional.

Contexto y delimitación espacial

El estudio se circunscribe al municipio de San Gil, Santander, reconocido por su actividad turística, crecimiento urbano y desafíos en materia de seguridad y convivencia ciudadana. La base temporal corresponde al periodo 2019-2023, que abarca la última administración municipal y la ejecución del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) vigente.



Fuentes y técnica de recolección de información

Las fuentes consultadas incluyen:

- Informes oficiales de la Alcaldía de San Gil, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior.
- Planes de desarrollo y documentos técnicos del PISCC municipal.
- Estadísticas delictivas y de percepción ciudadana reportadas por el DANE.
- Artículos académicos de revistas indexadas (Scielo, Redalyc, revistas universitarias nacionales).
- Documentos de organismos internacionales como PNUD, UNODC y CEPAL.

Debe resaltarse que no se han construido instrumentos propios de recolección de datos - como encuestas, entrevistas a informantes clave, observación participante, etc-, dado el carácter documental del estudio. Sin embargo, se aplicó una matriz de análisis de contenido para identificar las principales estrategias, enfoques, indicadores de implementación y efectos sobre la percepción ciudadana.

Procedimiento de análisis

Para este procedimiento, la técnica cualitativa del análisis de contenido se tradujo en la construcción y aplicación de una matriz analítica que, a fin de organizar, codificar y categorizar la información documental de forma inductiva, lo que facilitó la identificación de patrones, temas y relaciones significativas. Esta técnica resultó clave para interpretar los significados y tensiones presentes en las estrategias de seguridad y en la percepción ciudadana, garantizando un análisis riguroso y contextualizado acorde con el enfoque interpretativo de la investigación.

El análisis de la información se desarrolló en tres fases sistemáticas y complementarias, coherentes con el enfoque cualitativo e interpretativo adoptado en la investigación:

- **Recolección y organización de la información secundaria:** Se seleccionaron fuentes documentales oficiales, académicas e institucionales, aplicando criterios de inclusión basados en la relevancia, actualidad (periodo 2019-2023) y pertinencia temática (políticas públicas de seguridad, percepción ciudadana, estrategias locales, participación comunitaria y gobernanza). La información fue categorizada en una matriz de análisis de contenido diseñada específicamente para identificar indicadores clave, enfoques estratégicos y efectos reportados en la percepción ciudadana. (Dabenigno, 2019, p. 25).
- **Lectura crítica y comparación de contenidos:** Se realizó una lectura detallada y reflexiva de los documentos, contrastando los hallazgos institucionales con los planteamientos teóricos y la evidencia académica disponible. Esta fase permitió identificar coincidencias, tensiones y vacíos en las políticas y estrategias de seguridad, así como en las percepciones sociales asociadas, fortaleciendo la validez del análisis mediante la triangulación entre diversas fuentes. (Castañeda, 2024, p. 48; CONEVAL, 2015, p. 12).
- **Síntesis analítica:** A partir de la matriz y la comparación crítica, se elaboró una síntesis interpretativa que estableció relaciones entre las estrategias implementadas en San Gil y su impacto real o percibido en la comunidad. Esta síntesis permitió identificar avances, limitaciones y oportunidades de mejora, aportando una comprensión profunda y contextualizada del fenómeno de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio. (Castañeda, 2024, p. 52).



Este procedimiento metodológico garantiza la coherencia entre el enfoque interpretativo y el análisis documental, facilitando una comprensión integral y crítica del objeto de estudio.

Resultados

El análisis documental efectuado acorde a lo señalado *ut supra*, permitió identificar que el municipio de San Gil, Santander, ha desarrollado una serie de estrategias de seguridad ciudadana en el marco del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), formulado conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio del Interior en la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ministerio del Interior, 2022).

De esta forma, las estrategias implementadas responden a problemáticas locales específicas, tales como el hurto a personas, el microtráfico, la violencia intrafamiliar, la ocupación del espacio público y la conflictividad en zonas turísticas. Entre las acciones más relevantes ejecutadas durante el periodo 2019-2023, destacan:

- La instalación y ampliación del sistema de videovigilancia urbana, con más de cincuenta cámaras operativas ubicadas en sectores estratégicos, incluyendo el parque central, la terminal de transporte, el Malecón, barrios de alta densidad poblacional y rutas escolares. Este sistema ha optimizado el monitoreo en tiempo real y la capacidad de respuesta de la Policía Nacional (Alcaldía de San Gil, 2023; Martínez & Rincón, 2022).
- El desarrollo de campañas educativas y preventivas en colegios, parques y espacios públicos, coordinadas por la Secretaría de Gobierno, la Policía Nacional y la Comisaría de Familia. Estas campañas se han orientado a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, la promoción de la cultura ciudadana, el respeto a la autoridad y la resolución pacífica de conflictos (Policía Nacional, 2023).
- El fortalecimiento de los frentes de seguridad comunitaria mediante la articulación con las Juntas de Acción Comunal (JAC), líderes barriales y organizaciones sociales, con el propósito de fomentar la corresponsabilidad y la vigilancia colaborativa, especialmente en barrios como La Gruta, Rincón de la Paz y José Antonio Galán (Salazar & Peña, 2023).
- La ejecución de patrullajes integrados entre la Policía, el Ejército y gestores de convivencia, priorizados durante eventos de alta concurrencia como la Semana Santa, ferias municipales y actividades culturales. Estas acciones se complementan con controles de alcoholemia, registros en vía pública y operativos contra expendios de estupefacientes (Universidad de Santander, 2022).
- La creación de una red de monitoreo institucional conformada por enlaces comunitarios, la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional, destinada a mapear zonas críticas e intervenir de manera focalizada con estrategias diferenciales.

Cabe destacar que estas iniciativas han contado con financiamiento parcial proveniente del Fondo Territorial de Seguridad, complementado con recursos departamentales y convenios interinstitucionales. Sin embargo, se ha evidenciado la ausencia de indicadores claros de impacto, la falta de evaluaciones sistemáticas y la discontinuidad en la implementación ante cambios en las administraciones municipales (Bonilla & Acosta, 2020).

Respecto de la percepción ciudadana, se han identificado diversas tensiones respecto a las políticas de seguridad implementadas. En primer lugar, la limitada participación comunitaria en el diseño, implementación y seguimiento de las estrategias ha restringido la apropiación social y la corresponsabilidad ciudadana. En segundo término, la escasa visibilidad y comunicación efectiva de los resultados y beneficios de las políticas ha afectado negativamente la confianza



y la sensación de seguridad entre los habitantes. Por otra parte, es dable destacar que las problemáticas estructurales y subjetivas, como la percepción de riesgo en zonas turísticas y barrios vulnerables, no siempre son abordadas de manera integral por las estrategias oficiales.

De manera entonces que, aunque las políticas de seguridad implementadas en San Gil representan un esfuerzo institucional significativo, su impacto en la percepción ciudadana resulta limitado, lo que pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la participación comunitaria, mejorar los mecanismos de evaluación continua y promover la transparencia en la gestión pública para consolidar una seguridad ciudadana efectiva y sostenible.

Por otra parte, una de las tensiones más visibles en la gestión de la seguridad en San Gil es la disparidad entre las estrategias institucionales implementadas y la percepción de seguridad de la población, especialmente en contextos urbanos intermedios donde el turismo, el comercio informal y la movilidad poblacional generan entornos complejos (Bonilla & Acosta, 2020; Gómez-Suárez & Restrepo, 2021). A pesar de los avances técnicos y operativos, los datos y documentos revisados evidencian que la percepción de inseguridad sigue siendo alta, particularmente entre jóvenes, mujeres y adultos mayores que transitan por zonas con poca iluminación o en horarios nocturnos. Esto resulta claro a partir del Boletín Técnico de Seguridad y Convivencia Ciudadana del DANE (2023), al poner de manifiesto que más del 47% de los habitantes de San Gil considera que la inseguridad es un problema grave en su entorno, percepción que se mantiene constante incluso en barrios donde la criminalidad objetiva ha disminuido, como lo demuestran reportes recientes de la Policía Nacional (2023). Este fenómeno confirma que la percepción de seguridad no siempre guarda una relación directa con la frecuencia de delitos, sino que está mediada por factores sociales, comunicativos y emocionales (Smith, 2023; Lopez & García, 2022).

Tanto el análisis de contenido aplicado a fuentes secundarias como la literatura reciente han permitido identificar varios factores que inciden en la percepción ciudadana: en primer lugar, la limitada visibilidad de las acciones institucionales genera desconfianza; aunque se han realizado inversiones en tecnología y presencia policial, buena parte de la ciudadanía desconoce las estrategias en curso y sus resultados, lo que debilita la legitimidad institucional (Gómez-Suárez & Restrepo, 2021; Chen et al., 2024). En segundo lugar, la comunicación pública ineficaz y la ausencia de una estrategia sostenida de divulgación y diálogo ciudadano contribuyen a la desinformación y a la sensación de abandono, especialmente en sectores populares (Pérez, 2019).

A su vez, la percepción ciudadana está fuertemente influenciada por experiencias personales, relatos sociales y el impacto de las redes sociales, que suelen amplificar la sensación de inseguridad más allá de las estadísticas oficiales (Rojas, 2020). Este aspecto da cuenta acerca de cómo la seguridad resulta también una experiencia emocional y simbólica, que requiere ser abordada desde una perspectiva integral (Dabenigno, 2019).

Por otra parte, un dato no menor, ya que se observa también una desigualdad territorial significativa en la cobertura y efectividad de las estrategias de seguridad. Barrios como Villa Olímpica, La Gruta y San Martín presentan mayores niveles de preocupación debido a la percepción de vigilancia intermitente y reactiva, lo que genera sentimientos de exclusión y vulnerabilidad (Pensamiento Crítico, 2021); esto contradice los principios de equidad y justicia social que deben guiar las políticas públicas de seguridad (Blackwell, 2015).

Finalmente, la débil participación comunitaria en la formulación y seguimiento de las políticas limita la apropiación social y el sentido de corresponsabilidad, un aspecto ampliamente señalado en la literatura internacional sobre se-



guridad urbana (Quintero & Londoño, 2021; Salazar & Peña, 2023).

De esta forma, todo el andamiaje metodológico ha resultado fundamental para revelar estas tensiones, al permitir interpretar no solo los datos objetivos sino también las narrativas y representaciones sociales que configuran la percepción de seguridad; esta aproximación interpretativa facilita comprender la complejidad del fenómeno y la necesidad de políticas públicas que integren dimensiones subjetivas, comunicativas y de gobernanza local (Castañeda, 2024). Es decir, si bien las autoridades han avanzado en la cobertura tecnológica y operativa, el impacto sobre la percepción ciudadana ha sido limitado en buena medida debido a la escasa articulación con el tejido social y a la ausencia de canales efectivos que permitan a los ciudadanos sentirse protegidos, informados y partícipes en la construcción colectiva de seguridad (UNODC, 2021). San Gil enfrenta el reto de cerrar esa brecha simbólica y emocional entre la acción estatal y la vivencia cotidiana, para así avanzar hacia modelos de gobernanza local que promuevan la participación activa, la comunicación transparente y el enfoque diferencial territorial (PNUD, 2013; Ministerio del Interior, 2022).

Adicional a los aspectos señalados, el análisis comparativo entre las estrategias institucionales implementadas y la percepción ciudadana en San Gil confirma la existencia de una brecha estructural y multifactorial que limita la efectividad de las políticas públicas de seguridad. Esta brecha, común también en otros municipios intermedios del país, se explica por la distancia entre lo que el Estado considera exitoso en términos operativos y lo que la ciudadanía experimenta y valora como seguridad real en su entorno inmediato (Bonilla & Acosta, 2020; Gallego, 2019). Se identifican así cuatro brechas principales que dificultan la consolidación de una seguridad ciudadana legítima y efectiva.

En primer lugar, la tecnología desplegada, si bien moderna y ampliada en cobertura, carece de una pedagogía adecuada y de apropiación social ya

que la instalación de sistemas de videovigilancia y el fortalecimiento de la presencia policial en zonas estratégicas no han sido acompañados por campañas informativas que expliquen a la comunidad su funcionamiento, utilidad y resultados. Esta ausencia de comunicación genera escepticismo y desconocimiento sobre el impacto real de estas herramientas (Martínez & Rincón, 2022). A esto se suma la falta de mecanismos de consulta ciudadana para evaluar colectivamente la ubicación, mantenimiento y efectividad de estos dispositivos refuerza la percepción de que las decisiones se toman sin participación social, limitando la confianza y la corresponsabilidad (Smith et al., 2023).

En segundo lugar, la presencia institucional, aunque más frecuente, no siempre se percibe como cercana ni culturalmente empática. Los ciudadanos no siempre ven a las autoridades como aliadas o protectoras, sino en ocasiones como figuras lejanas, represivas o ineficaces. Esta distancia simbólica dificulta la construcción de relaciones de confianza entre la ciudadanía y el Estado, generando sentimientos de inseguridad incluso en espacios vigilados (UNODC, 2021; Rojas, 2020). La literatura destaca que la confianza es un componente esencial para la legitimidad y eficacia de las políticas de seguridad (López & García, 2022).

En tercer lugar, la participación comunitaria en la formulación y ejecución de las políticas de seguridad es débil o simbólica. La mayoría de las estrategias son diseñadas desde los despachos institucionales, con escasa inclusión de organizaciones comunitarias, líderes barriales, mujeres o jóvenes. Aunque existen frentes de seguridad, su capacidad de incidir en la toma de decisiones o en la planificación estratégica es limitada y, en muchos casos, protocolaria (Salazar & Peña, 2023; Universidad de Santander, 2022). Esta falta de participación real genera desmotivación social, baja apropiación de las políticas y desconfianza en los resultados, aspectos que han sido ampliamente documentados como obstáculos para la gobernanza local efectiva (Gómez-Suárez & Restrepo, 2021).



Finalmente, gravita la desigualdad territorial en la implementación de las estrategias: sectores como el centro histórico, zonas turísticas y áreas institucionales han recibido atención prioritaria, mientras que los barrios periféricos y las zonas rurales han quedado rezagados en cobertura institucional, vigilancia y atención comunitaria. Esta disparidad a su vez genera una percepción de exclusión y un doble estándar en la gestión de la seguridad pública, que afecta negativamente la cohesión social y la legitimidad de las políticas (Alcaldía de San Gil, 2023; Pensamiento Crítico, 2021), ya que la equidad territorial es un principio clave para la sostenibilidad y legitimidad de las políticas de seguridad (Blackwell, 2015).

En conjunto, estas brechas ponen de manifiesto la necesidad de repensar y rediseñar las políticas de seguridad en San Gil, incorporando enfoques participativos, pedagógicos, culturales y territoriales que permitan cerrar la distancia entre la acción institucional y la experiencia cotidiana de la ciudadanía.

Prospectiva para la seguridad ciudadana en San Gil: un enfoque integral y participativo

La prospectiva aplicada a la seguridad ciudadana radica en anticipar potenciales escenarios futuros y en función de estos diseñar estrategias que no solo respondan a las problemáticas actuales, sino que también fortalezcan la gobernanza local, la participación social y la equidad territorial (Godet, 2000; Inayatullah, 2008). En San Gil, donde se ha identificado una brecha estructural entre las acciones institucionales y la percepción ciudadana, esta mirada estratégica es fundamental para construir políticas legítimas, inclusivas y sostenibles, alineadas con los principios de seguridad humana y gobernanza democrática (Buzan, 2008; PNUD, 2013).

Con esta impronta por delante, se proponen aquí en cuatro líneas estratégicas para orientar la

transformación de la seguridad ciudadana en San Gil:

- **Estrategia de Comunicación Pública y Pedagógica Multicanal:** Implementar una comunicación constante, clara y participativa a través de medios tradicionales, digitales y comunitarios que informe a la ciudadanía sobre las acciones de seguridad, sus resultados y los canales de denuncia y evaluación. Esta debe incluir campañas pedagógicas que expliquen el uso y beneficios de tecnologías de vigilancia y protocolos de seguridad, promoviendo la transparencia y la apropiación social. Fomentar espacios de diálogo, como foros ciudadanos y talleres informativos, fortalecerá la confianza entre autoridades y comunidad, un aspecto crucial para la legitimidad institucional (Pérez, 2019; Chen et al., 2024; UNODC, 2021).
- **Institucionalización de Mecanismos de Participación Ciudadana Vinculante:** Crear y consolidar espacios de participación real y vinculante, tales como observatorios locales de seguridad, mesas barriales, presupuestos participativos y consultas públicas periódicas sobre el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC). La inclusión activa de diversos sectores sociales legitima las políticas, fomenta la corresponsabilidad y fortalece el tejido social, tal como lo evidencian Gómez-Suárez y Restrepo (2021) y Quintero y Londoño (2021). Además, promover la formación de liderazgos comunitarios y redes colaborativas permitirá una vigilancia preventiva y una gestión compartida de la seguridad (Blackwell, 2015).
- **Aplicación de un Enfoque Diferencial y Territorial:** Diseñar políticas sensibles a las particularidades de mujeres, jóvenes, población LGTBI, comunidades rurales e indígenas, incorporando sus voces en todas las fases del ciclo de la política pública. La realización de diagnósticos territoriales participativos facilitará la identificación de



riesgos, recursos y prioridades específicas en cada sector del municipio, garantizando intervenciones culturalmente pertinentes y equitativas. Este enfoque es esencial para abordar las desigualdades territoriales y sociales que afectan la percepción y experiencia de seguridad (López & García, 2022; PNUD, 2013).

- **Articulación entre Estado, Comunidad y Academia para la Innovación y Evaluación:** Fomentar alianzas estratégicas entre el gobierno local, organizaciones comunitarias y universidades para desarrollar diagnósticos participativos, investigaciones aplicadas y programas de formación ciudadana en cultura de la legalidad. Establecer sistemas de evaluación conjunta del impacto de las políticas de seguridad, que integren indicadores sociales y percepciones ciudadanas junto a datos operativos, permitirá una gestión adaptativa y sostenible. Promover espacios de innovación social para diseñar y probar soluciones a los desafíos locales fortalecerá la gobernanza y la resiliencia comunitaria (UNODC, 2021; PNUD, 2013).

La implementación de estas líneas estratégicas prospectivas permitirá cerrar la brecha entre las decisiones institucionales y las expectativas sociales, garantizando una seguridad ciudadana que sea efectiva, legítima, cercana y sostenible, en consonancia con los principios contemporáneos de gobernanza local y seguridad humana (Ministerio del Interior, 2022; Buzan, 2008).

Discusión y Conclusión

Los resultados obtenidos en el presente análisis de las estrategias de seguridad implementadas en San Gil entre 2019 y 2023 en principio dan cuenta de la complejidad y multidimensionalidad inherente a la seguridad ciudadana. Aunque el municipio ha avanzado en la implementación de acciones que combinan vigilancia tecnológica, prevención social y articulación institucional, persiste una brecha significativa entre la acción

estatal y la percepción ciudadana de seguridad, por lo que este hallazgo confirma que la seguridad no puede concebirse únicamente como la reducción de indicadores delictivos, sino como un proceso social que requiere la generación de confianza, la participación y la corresponsabilidad.

La persistencia de una percepción elevada de inseguridad, aún a pesar de la disminución objetiva de ciertos delitos, refleja la importancia de los factores subjetivos y culturales en la construcción social de la seguridad. La experiencia cotidiana con el delito, la insuficiente comunicación institucional y la limitada participación comunitaria emergen como elementos clave que modulan dicha percepción, evidenciando que las políticas centradas exclusivamente en el control y la vigilancia tecnológica resultan insuficientes para generar una sensación de seguridad sostenible y sobre todo, legítima.

Sin dudas, estos hallazgos dialogan estrechamente con la necesidad de abordar la seguridad desde una perspectiva integral que reconozca la diversidad de experiencias sociales y territoriales, y que promueva la inclusión activa de la ciudadanía en la formulación y evaluación de políticas. La ausencia de mecanismos efectivos de participación y diálogo comunitario limita la apropiación social de las políticas y debilita la gobernanza local, lo que a su vez impacta negativamente en la percepción de seguridad. Esta relación demuestra una vez más que la seguridad debe entenderse como un fenómeno construido socialmente, donde la participación y el reconocimiento de la diversidad son factores esenciales para su legitimidad y sostenibilidad.

En este sentido, la incorporación de una mirada prospectiva se vuelve fundamental para trascender las soluciones reactivas y fragmentadas, orientando la gestión de la seguridad hacia un modelo integral que anticipe escenarios futuros y promueva la innovación social. Esto implica fortalecer estrategias de comunicación pública multicanal y pedagógica, institucionalizar mecanismos vinculantes de par-



ticipación ciudadana, aplicar enfoques diferenciales y territoriales que reconozcan la diversidad social, y articular esfuerzos entre Estado, comunidad y academia para la evaluación conjunta y permanente de las políticas.

Asimismo, se identifica claramente la necesidad de fortalecimiento de los mecanismos de evaluación participativa y de comunicación efectiva entre el gobierno local y la ciudadanía, así como de institucionalizar espacios de diálogo que permitan comprender la inseguridad desde las realidades territoriales y sociales específicas. La gobernanza local en materia de seguridad debe avanzar hacia modelos inclusivos y colaborativos que reconozcan la diversidad de experiencias y necesidades, promoviendo la construcción colectiva de entornos seguros. Al captarse las tensiones entre las acciones institucionales y las vivencias ciudadanas, subrayando la importancia de enfoques integradores y contextualizados para comprender y abordar la seguridad ciudadana, la resultante redundante en una aproximación que contribuye a ampliar el campo de análisis en la

gestión pública local, enfatizando la seguridad como un derecho colectivo y una responsabilidad compartida.

En términos prácticos, se recomienda consolidar estrategias de comunicación pública claras y transparentes, que informen de manera constante sobre los avances y limitaciones en materia de seguridad. Asimismo, resulta fundamental promover la participación ciudadana activa en todas las fases de las políticas de seguridad, fortalecer programas educativos para la convivencia con enfoque diferencial y territorial, y garantizar la sostenibilidad de las estrategias mediante recursos adecuados, formación continua y articulación interinstitucional.

Finalmente, esta investigación abre la puerta a futuras exploraciones que utilicen metodologías participativas y estudios comparados para profundizar en la percepción ciudadana y su relación con las políticas de seguridad, contribuyendo a la construcción de modelos más legítimos, inclusivos y efectivos desde la perspectiva local.



Referencias

- Alcaldía de San Gil. (2023). *Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 "San Gil para Todos"*. <https://www.sangil-santander.gov.co>
- Arriagada, I., & Godoy, L. (1999). *Seguridad ciudadana y violencia en América Latina: diagnóstico y políticas en los años noventa* (Serie Políticas Sociales, No. 32). Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/6263>
- Álvarez Calderón, C. E. (2017). Ocupación de los espacios vacíos: Una condición sine qua non para la seguridad multidimensional en Colombia. En C. E. Álvarez Calderón (Ed.), *Escenarios y desafíos para la seguridad multidimensional en Colombia* (pp. 307-385). Sello Editorial ESDEG. <https://doi.org/10.25062/9789585652835>
- Bergman, M. (2017). *La gobernanza de la seguridad en América Latina*. Universidad Torcuato Di Tella.
- Blackwell, R. (2015). Community engagement and public safety: Strategies for inclusive governance. *Public Safety Journal*, 12(3), 145-160.
- Bonilla, L., & Acosta, J. (2020). Estrategias de seguridad y gobernanza territorial en Colombia. *Revista Ciencia Política*, 18(2), 109-128. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.rcp18-2.esgt>
- Buzan, B. (2008). *People, states and fear: An agenda for international security studies in the post-cold war era* (2ª ed.). Harvester Wheatsheaf.
- Castañeda, J. (2024). Análisis cualitativo de los programas preventivos de seguridad ciudadana. *Revista Invecom*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14270961>
- Chen, L., Martínez, F., & López, R. (2024). The role of communication in shaping public perception of security. *Security Journal*, 37(2), 150-168.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2019). *Percepción de inseguridad y cohesión social en América Latina*. <https://www.cepal.org>
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). (2015). *Evaluación integral: componente evaluación cualitativa percepción de inseguridad*.
- Dabenigno, V. (2019). Estrategias para el análisis de datos cualitativos. *Herramientas para la Investigación Social*, 2, 22-35.
- DANE. (2023). *Boletín Técnico de Seguridad y Convivencia Ciudadana*. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. <https://www.dane.gov.co>
- Godet, M. (2000). *Creating Futures: Scenario Planning as a Strategic Management Tool* (2nd ed.). Economica.
- Gómez-Suárez, A., & Restrepo, L. (2021). Percepción de seguridad y confianza institucional en municipios colombianos. *Revista de Estudios Sociales*, (78), 90-105. <https://doi.org/10.7440/res78.2021.07>



Inayatullah, S. (2008). Six pillars: Futures thinking for transforming. *Foresight*, 10(1), 4-21. <https://doi.org/10.1108/14636680810855991>

Lopez, M., & Garcia, R. (2022). Perception of safety in intermediate cities: Challenges and opportunities. *International Journal of Security and Development*, 11(2), 101-120.

Martínez, F., & Rincón, J. (2022). Evaluación de cámaras de videovigilancia en municipios turísticos colombianos. *Revista de Gestión Pública*, 12(2), 141-160.

Ministerio del Interior. (2022). *Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana* (PNSCC). <https://www.mininterior.gov.co>

Muggah, R., & Aguirre, K. (2018). *Citizen Security in Latin America: Facts and Figures*. Igarapé Institute. <https://igarape.org.br>

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2021). Estudio mundial sobre seguridad pública y gobernanza local. <https://www.unodc.org>

Organización de Estados Americanos (OEA). (2003). *Informe sobre seguridad ciudadana en América Latina*.

Ospina, J. (2021). Educación para la convivencia en contextos locales. *Revista Pedagogía y Ciudadanía*, 17(1), 33-49.

Pérez, D. (2019). Medios de comunicación y percepción de inseguridad. *Revista Javeriana de Comunicación*, 16(2), 88-102.

Policía Nacional de Colombia. (2023). *Informe anual de criminalidad y seguridad ciudadana*. <https://www.policia.gov.co>

PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2013). *Seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina*. <https://www.undp.org/es>

Quintero, S., & Londoño, F. (2021). Diseño de políticas públicas en ciudades intermedias: análisis comparado de casos en Colombia. *Revista de Políticas Públicas*, 14(1), 117-138.

Revista Pensamiento Crítico. (2021). Análisis de percepción de inseguridad en jóvenes de San Gil. *Revista de Investigación de Unisangil*, 10(1), 55-72.

Rojas, M. (2020). Factores psicosociales asociados a la percepción del miedo en espacios urbanos. *Revista Latinoamericana de Psicología Urbana*, 9(3), 45-63.

Salazar, N., & Peña, C. (2023). Redes comunitarias y estrategias de prevención del delito. *Revista EAFIT de Estudios Urbanos*, 11(1), 50-68.

Smith, J. (2023). Community participation and urban security: A multidimensional approach. *Journal of Urban Studies*, 45(1), 55-72.

Universidad de Santander. (2022). Diagnóstico de seguridad ciudadana en municipios turísticos de Santander. *Revista UIS Humanidades*, 49(2), 33-50.